


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

Entidad originadora:	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Fecha (dd/mm/aa):	2 de marzo de 2026
Proyecto de Resolución:	Por la cual se adoptan los Términos de Referencia -TdR- y se establecen los criterios diferenciales del procedimiento de licenciamiento ambiental de pequeña minería para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en sus territorios colectivos, territorios en trámite de adjudicación y ocupados ancestralmente de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.5.11.5.8 del Decreto 1396 de 2023 y se dictan otras disposiciones.


## 1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN

La Ley 70 de 1993 es la norma que reconoce los derechos territoriales, culturales, económicos y políticos de las comunidades negras en nuestro país y se caracteriza por su integralidad, por cuanto en su diseño contempló el reconocimiento de un conjunto diverso de derechos constitucionales y fundamentales, de titularidad individual y colectiva, que involucran el territorio, los recursos naturales, la identidad étnica, la diversidad cultural, la autonomía y el etnodesarrollo. Así mismo, es una Ley de Territorialidad, por cuanto contiene los instrumentos legales para el reconocimiento y la protección de la propiedad colectiva de los territorios ancestrales de las comunidades negras de Colombia; también es una Ley de protección ambiental, porque en su estructura, incorpora diversos instrumentos para garantizar la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales existentes en los territorios colectivos; es igualmente una Ley de lucha contra la discriminación y el racismo, porque introduce diversos instrumentos para erradicar en Colombia todo acto de intimidación, segregación, discriminación o racismo contra las poblaciones afrodescendientes.

Por lo que el desarrollo del proyecto de Resolución contempla los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que son también predicables de los específicamente reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional a los pueblos étnicos. En ese marco, la autonomía, el territorio, la consulta, el principio de no discriminación y la igualdad de culturas, constituyen un conjunto armónico de principios, que requieren el uno del otro para su eficacia, y que conforman una visión integral de la pervivencia de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. También se sustenta en la necesidad ética, jurídica y política de que, desde el enfoque constitucional, el Gobierno nacional reconozca que esta reglamentación se encuentra gobernada por el enfoque diferencial étnico en los siguientes términos jurisprudenciales:

*“El enfoque diferencial como desarrollo del principio de igualdad, en tanto trata diferencialmente a sujetos desiguales, busca proteger a las personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad o de debilidad manifiesta, de manera que se logre una verdadera igualdad real y efectiva, con los principios de equidad, participación social e inclusión. Dentro del enfoque diferencial, se encuentra el enfoque étnico, el cual tiene que ver con la diversidad étnica y cultural, de tal manera que teniendo en cuenta las particularidades especiales que caracterizan a determinados grupos étnicos y el multiculturalismo, se brinde una protección diferenciada basada en dichas situaciones específicas de vulnerabilidad, que en el caso de las comunidades étnicas, como lo son las comunidades indígenas, afro, negras, palenqueras, raizales y Rom, se remontan a asimetrías históricas. Dicho principio, permite visibilizar las vulnerabilidades y vulneraciones específicas de grupos e individuos, por lo que partiendo del reconocimiento focalizado de la diferencia se pretenden garantizar los principios de igualdad, diversidad y equidad”. (Sentencia T-010 de 2015).*

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

### **Ley 70 de 1993 y el reconocimiento de los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia**

El artículo 55 transitorio de la Constitución Política estableció un plazo para la expedición de una ley especial que le reconociera a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, raizales y Palenqueras de Colombia, la titulación colectiva de las tierras baldías rurales y ribereñas que han venido ocupando con sus prácticas tradicionales de producción en la cuenca del Pacífico y en otras regiones del país con condiciones similares de ocupación. Asimismo, dispuso el constituyente que en esa misma ley se adoptaran mecanismos especiales para la protección de la identidad cultural de estas comunidades y para la planeación y el fomento de su desarrollo económico, social, cultural y ambiental.

En cumplimiento del mandato constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 70 del 27 de agosto de 1993 mediante la cual se adoptaron los principales instrumentos normativos para el impulso de la agenda de derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Así, esta Ley es el marco de derechos y el estatuto de autonomía más importante del pueblo afrocolombiano, después de la ley de abolición legal de la esclavitud de 1851, así como una ley de reparación histórica que busca reivindicar y resarcir siglos de esclavismo, racismo, exclusión y despojo al que ha sido sometido el pueblo negro colombiano, tal y como ha sido reconocido la Corte Constitucional al señalar que *“el legislador expidió la Ley 70 de 1993 (...), cuyo propósito, entre otros, es el de establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico”* (Sentencia T-292 de 2017).


Dentro de los principales ejes temáticos de la Ley 70 de 1993, se destaca para los fines pertinentes la protección y promoción de los derechos territoriales, ambientales y mineros de las comunidades negras. En el eje de territorialidad, se reconocen los derechos ancestrales sobre los territorios colectivos, garantizando su propiedad a través de la titulación colectiva y promoviendo la restitución de tierras despojadas. En el eje ambiental, se destaca la importancia de la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales, incluyendo la participación activa de las comunidades en la administración, conservación, gestión y utilización de dichos recursos, con el propósito de garantizar su sostenibilidad y para que pudieran ser aprovechados en beneficio de las generaciones afrodescendientes presentes y futuras.

En cuanto a los recursos mineros, la Ley 70 de 1993 reconoce el derecho de las comunidades negras a explorar y explotar en forma exclusiva, directamente o en asociación con los particulares, los recursos naturales no renovables tradicionalmente aprovechados por ellas en sus territorios colectivos, con el fin de preservar sus especiales características culturales y económicas de tales recursos.

También se estableció el derecho de prelación para las comunidades negras sobre todos los recursos naturales no renovables tradicionalmente aprovechados por ellas, con excepción expresa del carbón, los minerales radioactivos, las sales y los hidrocarburos, para lo cual el Ministerio de Minas y Energía debía otorgar una licencia especial de exploración y explotación en las zonas mineras de comunidades negras y se ordenó al Gobierno Nacional la formulación y ejecución de una política especial de fomento minero en los territorios colectivos de estas comunidades.

Así las cosas, la Ley 70 de 1993 se caracteriza por su integralidad por cuanto en su diseño contempló no solo el reconocimiento de un conjunto diverso de derechos constitucionales y fundamentales, de titularidad individual y colectiva, que involucran el territorio, sino también de los recursos naturales, la identidad étnica, la diversidad cultural, la autonomía

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

y el etnodesarrollo. En este sentido, se entiende como una Ley de Territorialidad por cuanto contiene los instrumentos legales para el reconocimiento y la protección de la propiedad colectiva de los territorios ancestrales de las comunidades negras de Colombia; así mismo se entiende como una Ley de protección ambiental porque en su estructura incorpora diversos instrumentos para garantizar la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales existentes en los territorios colectivos.

### **Marco normativo y regulatorio del licenciamiento ambiental**

Con el propósito de desarrollar la reglamentación del Artículo 2.2.5.11.5.8 del Decreto 1396 de 2023 es necesario tener en cuenta la normatividad del procedimiento de licenciamiento ambiental en Colombia como marco regulatorio, el cual se desarrolla a continuación.

El numeral 2 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 estableció como función del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural.

El numeral 14 del artículo 5 ibidem estableció como función del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la definición y regulación de los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambiental de las actividades económicas.

El artículo 49 ibidem establece que “(...) requerirán Licencia ambiental para su ejecución los proyectos, obras o actividades, que puedan generar deterioro grave al medio ambiente, a los recursos naturales renovables o al paisaje (...).”


El artículo 50 ibidem define la licencia ambiental como “(...) la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.”

Como desarrollo normativo de la Ley 99 de 1993, se definió en el Decreto 1076 de 2015 establece que estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en sus artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3.

El artículo 2.2.2.3.1.3. ibidem estableció el concepto y alcance de la licencia ambiental, como la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

Ahora bien a efectos de cumplir con el mandato constitucional y legal, el Gobierno del Cambio, mediante el artículo 351 de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, “Colombia

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

Potencia Mundial de la Vida”, ordenó al Gobierno Nacional para que dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la Ley, formulara un Plan Integral de reglamentación e implementación de la Ley 70 de 1993, en este entendido, el presente instrumento normativo constituye parte del cumplimiento del referido plan.

Por otra parte, el Decreto 1396 de 2023 en su artículo 2.2.5.11.5.8 estableció que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en un plazo máximo de seis (6) meses reglamentará los términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental y procedimiento diferencial del licenciamiento ambiental para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras ara el contrato de concesión especial dirigido a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que desarrollan la pequeña minería en sus territorios colectivos, en trámite de adjudicación y ocupados ancestralmente.

La expedición de la resolución objeto de la presente justificación se fundamenta en la necesidad de crear un marco regulatorio que permita a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras acceder a los instrumentos de manejo y control ambiental con un enfoque diferencial que reconozca sus derechos colectivos, sus prácticas ancestrales y su relación con los territorios que habitan, así como a sus autoridades propias que en cabeza de los consejos comunitarios ejercen la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de las comunidades negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen, y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad.

#### **Función social y ecológica de la propiedad y su alcance en los territorios de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras**


En virtud del principio de diversidad étnica y cultural y lo señalado por el artículo 5° de la Ley 70 de 1993, los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras administran internamente las tierras de propiedad colectiva que se les adjudique, delimitan y asignan, y conforme el artículo 6° de la misma norma, la propiedad de dichas tierras se ejercerá en función social y le es inherente una función ecológica velando por la conservación de la biodiversidad, la protección de los recursos naturales, así como la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural y la garantía de los derechos territoriales y culturales de las comunidades, siempre teniendo en cuenta un límite que es la protección del medio ambiente y la obligación de generar un desarrollo sea sostenible, por lo que el derecho de autonomía está delimitado en el interés general y el derecho colectivo a la protección del ambiente.

Ahora bien, el Congreso acogió la comprensión de los bosques y suelos en la propiedad colectiva que la Carta Política les reconoce a las comunidades negras, reafirmando la función social y ecológica de dicha propiedad, y que también fue tratada en el artículo 21 de la Ley 70 de 1993, donde se define:

*“...los integrantes de las comunidades negras, titulares del derecho de propiedad colectiva, continuarán conservando, manteniendo o propiciando la regeneración de la vegetación protectora de aguas y garantizando mediante un uso adecuado la persistencia de ecosistemas especialmente frágiles, como los manglares y humedales, y protegiendo y conservando las especies de fauna y flora silvestre amenazadas o en peligro de extinción”*

Lo anterior fue reforzado mediante la Sentencia T-955 de 2003 donde la Honorable Corte Constitucional que concluye que el derecho de las comunidades negras sobre su territorio colectivo se funda en la Carta Política y en el Convenio 169 de la OIT, ya que esto es indispensable para que dichas comunidades puedan ejercer las acciones civiles a que da lugar el

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

reconocimiento constitucional, que incluyen el uso de los recursos naturales renovables con criterios de sustentabilidad, tal como se describe a continuación:

*“el derecho de propiedad colectiva en comento comprende, y siempre comprendió la facultad de las comunidades negras de usar, gozar y disponer de los recursos naturales renovables existentes en sus territorios, con criterios de sustentabilidad, y de acuerdo con las limitaciones legales –Parte VII, Título II, D. 2811 de 1974–”*

Esos mismos criterios de sustentabilidad, complementan los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios -de acuerdo con sus propias leyes, costumbres- y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma de vida con base en la especial relación que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad. Este enfoque es desarrollado por la Sentencia T-622 de 2016 donde se define los derechos bioculturales como la *“...vinculación intrínseca entre naturaleza y cultura, y la diversidad de la especie humana como parte de la naturaleza y manifestación de múltiples formas de vida. Desde esta perspectiva, la conservación de la biodiversidad conlleva necesariamente a la preservación y protección de los modos de vida y culturas que interactúan con ella”*.

Por otra parte, la Sentencia T-1045A de 2010 ha establecido que además de la protección de la biodiversidad y la indemnidad de territorios de sensibilidad ecológica, se ha reafirmado el derecho de los grupos humanos minoritarios “a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales”, por lo tanto:


*“...la exploración y explotación de los recursos naturales en los territorios habitados por comunidades que demandan protección especial, ha de armonizarse con la necesidad de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (art. 80 Const.), resultando palmario que lo insustituible no se puede tocar, y con el aseguramiento de la integridad étnica, cultural, social y económica de las respectivas comunidades, preservando sus elementos de cohesión”*

En este sentido, los elementos de diferencialidad que se establecen en la presente iniciativa normativa están enmarcados no solamente en la protección de los derechos de las comunidades negras y sus prácticas tradicionales de producción que, consuetudinariamente han realizado para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible, sino que también incluyen los deberes y funciones de estas comunidades de continuar conservando los ecosistemas frágiles y manteniendo los recursos biológicos que incluyen la conservación de especies de fauna y flora silvestre amenazadas o en peligro de extinción.

Frente a las actividades económicas que desarrolle un particular o cualquier comunidad en territorio colombiano, la Corte Constitucional ha señalado a través Sentencia T-254 de 1993 los límites en el desarrollo de dichas actividades con respecto a las obligaciones ambientales de la misma:

*“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica*



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

*dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación”*


Finalmente, en cumplimiento de la Sentencia C-280 de 2024 la iniciativa normativa incluye las consideraciones de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo sobre los temas de su competencia, y que fueron allegados a la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana mediante Memorando 32022025E3009734 del 9 de junio de 2025.

### **Criterios diferenciales como ejes fundamentales de la reglamentación**

Con el propósito de presentar los criterios frente a los cuales se desarrolla la diferencialidad como elementos esenciales para asegurar que el proceso de licenciamiento ambiental refleje y respete las prácticas, valores y conocimientos locales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y asegure la participación del colectivo social étnico, en la presente iniciativa normativa toma en cuenta los principios establecidos en la Ley 70 de 1993 y en los estándares internacionales que deberán ser tenido en cuenta por parte de las autoridades ambientales y responsables técnicos que propenderán a que las comunidades accedan a los trámites de licenciamiento ambiental del contrato de concesión minera especial para comunidades negras, tomando en cuenta sus particularidades, sus condiciones de vida individuales y se regirán por los siguientes Criterios Diferenciales:

1. **Gobierno propio y gobernanza del territorio:** Se reconoce que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, constituidas a través de consejos comunitarios para su administración interna, toman decisiones colectivas y son representadas a través de sus instituciones de gobierno propio, lo que exige adaptar el licenciamiento ambiental a estas particularidades. Para estos efectos, se deben reconocer los instrumentos de uso, manejo y administración ambiental del territorio y de los recursos naturales renovables adoptados por el Consejo Comunitario, especialmente el consagrado en el artículo 2.2.12.2.2. del Decreto 1384 de 2023 que contiene el Plan de manejo ambiental.
2. **Sistemas ancestrales de explotación minera a pequeña escala:** Consiste en el reconocimiento de actividades, prácticas, procesos y conocimientos mineros que han desarrollado consuetudinariamente las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, de modo familiar o colectivo, para garantizar el sustento de la vida y mantener una relación armónica con la naturaleza. También se deberá tener en cuenta el Reglamento Interno, el Plan de Etnodesarrollo y demás instrumentos que contemplen las actividades mineras.
3. **Adecuación institucional:** Constituye una de las estrategias clave para llevar a la práctica los derechos y las garantías a las comunidades, que consiste en el ajuste de la perspectiva institucional de vertical a horizontal frente a las autoridades tradicionales, así como el ajuste de los procesos internos que permitan adaptación a la escala productiva, capacidades técnicas y formas de organización propias de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sin reducir los estándares de protección ambiental, en el marco de la sostenibilidad fiscal, el debido proceso administrativo y la progresividad.
4. **Diálogo intercultural:** Se refiere específicamente a diálogos entre miembros de diferentes grupos culturales. El diálogo intercultural asume que los participantes acuerdan escuchar y entender múltiples perspectivas, incluyendo incluso aquellas celebradas por grupos o individuos con quienes están en desacuerdo. UNESCO (2017).

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

5. **Eliminación del Racismo y formas de exclusión:** Se refiere a la eliminación de patrones y estructuras sociales que imponen condiciones opresivas o negativas a grupos identificables sobre la base de la raza o el origen étnico. Lo anterior en concordancia con la Directiva Presidencial 01 de 2023 y la Declaración de Durban.
6. **Conocimiento y Participación:** Los saberes ancestrales, territoriales y culturales de las comunidades se deben tomar en cuenta como aporte a las decisiones basadas en el conocimiento científico, para visibilizar sus cosmovisiones, fortalecer la identidad étnica y garantizar la participación en de manera activa, continua y efectiva desde la formulación de los estudios hasta el control y seguimiento, integrando el conocimiento tradicional con las prioridades comunitarias.

Los criterios diferenciales se armonizan con los siguientes ejes fundamentales:

- ✓ Eje 1: Los sistemas de explotación minera a pequeña escala en territorios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
- ✓ Eje 2: Gobierno propio y gobernanza en los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
- ✓ Eje 3: Instrumentos de ordenamiento territorial y/o ambiental en los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.


#### **Eje 1: Los sistemas de explotación minera a pequeña escala en territorios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.**

Frente al desarrollo de actividades mineras por parte de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, el artículo 31 de la Ley 70 de 1993, ordena que el Gobierno reglamente el Capítulo V y, en particular, “los requisitos y demás condiciones necesarias para su efectiva aplicación, de acuerdo con las normas mineras vigentes”. De esa forma se define el alcance que puede tener el desarrollo la exploración y explotación de los recursos naturales en los territorios de la colectividad étnica y los deberes frente a dicho uso. La Ley 70 de 1993 en el artículo 26, preceptúa:

"El Ministerio de Minas y Energía de oficio o a petición de las comunidades negras de que trata esta ley, podrá señalar y delimitar en las áreas adjudicadas a ellos zonas mineras de comunidades negras en las cuales la exploración y la explotación de los recursos naturales no renovables deberá realizarse bajo condiciones técnicas especiales sobre protección y participación de tales comunidades negras, con el fin de preservar sus especiales características culturales y económicas, sin perjuicio de los derechos adquiridos o constituidos a favor de terceros”.

Con respecto a las actividades mineras y al posible uso y explotación de los recursos por parte de las comunidades étnicas se ha establecido que cualquier uso, incluso el minero, deberá respetar los límites que la ley establezca para el desarrollo de la actividad minera. Esto también se definió en la Sentencia T-446 de 2021, donde se estableció:

“A partir de entonces, esta corporación ha interpretado que el mandato de protección a la diversidad étnica y cultural de la nación implica que estos grupos étnicos son sujetos de especial protección constitucional y tienen derecho, al menos: i) al territorio y a la titulación colectiva de los territorios que ocupan ancestralmente; ii) al aprovechamiento, uso y explotación de los recursos naturales que se encuentren en sus territorios (bajo los límites que la ley establezca) en

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	<b>MEMORIA JUSTIFICATIVA</b>	 Sistema Integrado de Gestión
	<b>Proceso:</b> Gestión jurídica	
<b>Versión:</b> 4	<b>Vigencia:</b> 25/11/2022	<b>Código:</b> F-A-GJR-07

tanto que son propietarios de estos y, por ende, iii) a ser consultados previamente sobre las medidas que puedan afectarles, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte”

Con el objetivo de dar cumplimiento del Decreto 1396 de 2023 en su Artículo 2.2.5.11.5.8, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, desarrolló una ruta de trabajo en conjunto con los delegados de la Comisión V del Espacio Nacional de Consulta Previa de comunidades negras, los días 23, 24 y 25 de abril de 2024.


Como resultado de dicha ruta de trabajo se acordó realizar 5 visitas a territorios donde confluyan en mayor medida las comunidades negras y las áreas de explotación minera, con el propósito de realizar un levantamiento de información primaria acerca de los Sistemas Ancestrales de Producción Minera. Estas visitas fueron coordinadas con los integrantes de la Comisión V del Espacio Nacional de Consulta Previa que representan departamentos como Chocó, Nariño y Cauca. A continuación, se relacionan las visitas de campo realizadas a los siguientes consejos comunitarios:

1. Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina y Popular del Alto Atrato. (COCOMOPOCA) ubicado en el municipio de Atrato (Chocó) el día 26 de junio de 2024
2. Consejo Comunitario Mayor Del Alto San Juan – ASOCASAN ubicado en el municipio de Tadó (Chocó) el día 4 de julio de 2024
3. Consejo Comunitario Mayor de Condoto - Iró COCOMACOIRO ubicado en el municipio de Condoto (Chocó) el día 5 de julio de 2024
4. Consejos Comunitarios de Unión Bajo Guelmanbi y El Bien del Futuro ubicados en el municipio de Barbacoas (Nariño) el día 25 de julio de 2024
5. Consejo Comunitario de La Toma ubicado en el municipio de Suarez (Cauca) el día 16 de septiembre de 2024

Conforme la información de campo obtenida en las visitas y las reuniones con los líderes de las comunidades negras y teniendo en cuenta las particularidades de las actividades mineras en los consejos comunitarios, las cuales deberán llevarse a cabo bajo condiciones técnicas especiales de protección y participación de las comunidades negras, y con el objetivo de preservar sus características culturales y económicas, facilitando la obtención de información sobre el proyecto minero en el territorio colectivo de comunidades negras y agilizando así la evaluación por parte de la autoridad ambiental, los Términos de Referencia contemplan la posibilidad de que el Consejo Comunitario establezca Unidades de Producción Minera (UPM) conforme a la distribución interna que realice el consejo comunitario de manera autónoma. Estas UPM se definen como el conjunto de labores, instalaciones, operaciones y/o equipos que constituyen una infraestructura económica y administrativa dedicada a la explotación de minerales. (Ministerio de Minas y Energía, 2016).

Ahora bien, considerando las particularidades que puede tener una Unidad de Producción Minera (UPM), como la diversificación de herramientas y equipos en el sistema de explotación, las técnicas utilizadas, los requerimientos de recursos naturales y los impactos ambientales generados, es necesario establecer un Plan de Manejo Ambiental (PMA) específico para cada una de estas unidades. Este PMA debe incluir varios elementos clave, como la delimitación del área de explotación, las obligaciones ambientales correspondientes a cada UPM y la titularidad de cada Consejo Comunitario Menor, según su reglamento interno minero. Es fundamental que estos planes se adapten a las características particulares de cada unidad, asegurando un manejo adecuado y responsable de los recursos naturales.



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

## Eje 2: Gobierno propio y gobernanza en los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, reconoce el derecho de los pueblos étnicos a mantener sus culturas, costumbres y creencias, a participar en las decisiones que los afectan, a la propiedad de sus territorios y a decidir conforme sus autoridades e instituciones.

De los artículos 14 al 19, hacen un llamado a respetar la relación colectiva que las comunidades étnicas tienen con las tierras o territorios. Para ello, los estados firmantes deben determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente, y en este sentido, atender las reivindicaciones territoriales presentadas por las comunidades; permitir el retorno o regreso a sus tierras en caso de que tuvieran que dejarlas; a respetar las formas de transmisión de los derechos sobre la tierra entre ellos; a impedir que terceros se apropien de la propiedad o posesión de las tierras de estas comunidades; a asignarles tierras suficientes para garantizar su existencia y su crecimiento; a promover la participación de los pueblos en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales.


Por su parte, el Decreto 1745 de 1995 compilado por el Decreto 1066 de 2015, en sus artículos 2.5.1.2.3, 2.5.1.2.6, indica:

“Artículo 2.5.1.2.3 Definición. Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad. (...) 6. Decidir sobre los temas que por mandato de este capítulo y los reglamentos internos de la comunidad sean de su competencia”

La Corte Constitucional ha destacado que *“el Consejo comunitario de las comunidades negras es la persona jurídica que ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de las comunidades negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad”* (Sentencia C-317 de 2022).

En la misma providencia, el alto tribunal advierte que *“de acuerdo con la Ley 70 de 1993, los consejos comunitarios son un tipo de organización ligada al concepto de propiedad colectiva que, posteriormente, con la expedición del Decreto Reglamentario 1745 de 1995 adquirieron la categoría de máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de comunidades negras. Estas instituciones están conformadas por la Asamblea General y la Junta Directiva y cuentan con la participación de un Representante Legal “que es el encargado de representar a la comunidad, en cuanto persona jurídica. En este espacio se define el devenir cultural, político y económico de los territorios de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras”*.

Los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras, son entonces, personas jurídicas cuya creación está autorizada por el artículo 5º de la Ley 70 de 1993, que tienen entre sus funciones las de administrar internamente las tierras de propiedad colectiva que se les adjudique, delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas, velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales y hacer de amigables componedores en los conflictos internos factibles de conciliación.

En este sentido, la Corte Constitucional en sentencia SU-111 de 2020 señaló que:

"Cada comunidad negra debe formar un consejo comunitario como manera de administración interna, el cual tiene entre sus diversas funciones la de materializar esta doble finalidad de la propiedad colectiva regulada en la Ley 70 de 1993. Esto es reconocido por el artículo 5° de la ley 2160 de 2021, la cual prescribe que los consejos comunitarios deben velar por la preservación de la identidad cultural y por el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales".


En este contexto, la elaboración de estudios de impacto ambiental debe integrar el gobierno propio y la forma de gobernanza interna de los consejos comunitarios solicitantes del trámite de licenciamiento ambiental de sus actividades de pequeña minería, como elementos esenciales para asegurar que el proceso refleje y respete las prácticas, valores y conocimientos locales y asegure la participación del colectivo social étnico.

En este punto, toma relevancia las instancias de gobierno propio del Consejo Comunitario dentro de los territorios colectivos. Este órgano, conformado por una junta directiva elegida en asamblea por todos los miembros del Consejo Comunitario, ejerce una autoridad legítima en la conciliación y resolución de conflictos según su cultura y tradiciones. Para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, el Consejo Comunitario actúa como la instancia clave para las concertaciones y la toma de decisiones, tales como adelantar la representatividad de dicha comunidad étnica ante las autoridades ambientales para el respectivo trámite de licenciamiento ambiental de las actividades de pequeña minería adelantadas por ellos en sus propios territorios, en especialmente en aquellos procesos que requieren consulta previa. Su participación asegura que el manejo de los recursos naturales y la gestión ambiental se realicen de manera concertada al interior del colectivo étnico y que respete sus prácticas tradicionales.

Lo anterior, en virtud del principio a la diversidad étnica y cultural, que ha reiterado la Corte Constitucional en favor de estas comunidades, pues además de reconocer la existencia de un grupo étnicamente diferenciado, también corresponde al Estado el deber de garantizar el ejercicio efectivo de su autodeterminación, sus instituciones, y autoridades de gobierno, lo cual implica, la posibilidad de seguir sus normas, costumbres, "opciones de desarrollo, visión del mundo y proyectos de vida". Así conforme las sentencias T-446/21 y T-151 de 2019, las comunidades étnicamente diferenciadas tienen derecho a:

"(...) (i) Tener su propia vida cultural, (ii) profesar y practicar su propia religión como manifestación cultural, (iii) preservar, practicar, difundir y reforzar otros valores y tradiciones sociales, culturales, religiosas y espirituales, así como sus instituciones políticas, jurídicas, sociales, culturales, etc. (iv) emplear y preservar su propio idioma, (v) no ser objeto de asimilaciones forzadas; (vi) conservar, acceder privadamente y exigir la protección de los lugares de importancia cultural, religiosa, política, etc. para la comunidad; (vii) conservar y exigir protección a su patrimonio cultural material e inmaterial; (viii) utilizar y controlar sus objetos de culto; (ix) revitalizar, fomentar y transmitir a las generaciones presentes y futuras sus historias, tradiciones orales. Filosofía, literatura, sistema de escritura y otras manifestaciones culturales; (x) emplear y producir sus medicinas tradicionales y conservar sus plantas, animales y minerales medicinales; (xi) participar en la vida cultural de la Nación; (xii) seguir un modo de vida según su cosmovisión y relación con los recursos naturales; (xiii) preservar y desarrollar su modos de producción y formas económicas

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

tradicionales; y (xiv) exigir protección de su propiedad intelectual relacionada con obras, creaciones culturales y de otra índole”

### **Eje 3: Instrumentos de ordenamiento territorial y/o ambiental en los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.**

Los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental en los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras son esenciales para la organización y regulación de las actividades mineras en estas áreas. Al implementar estos instrumentos, se asegura que las actividades mineras se alineen con prácticas de manejo sostenible y respetuoso de los recursos naturales, fundamentales para la preservación del medio ambiente y el bienestar de las comunidades negras.

Este asunto no conlleva un conflicto de competencias entre las autoridades étnicas y las ambientales o las mineras, ya que dichas actividades deben ser realizadas en los términos definidos en la Ley, sin perjuicio de las funciones de las autoridades competentes. Este asunto fue tratado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-389 de 2016, en donde se define:


*“La Corte comienza por indicar que, tal como lo mencionan los accionantes, el artículo 330 de la Carta Política ha conferido a los pueblos indígenas, entre otras, la potestad de actuar como autoridades ambientales dentro de sus territorios, al tiempo que la sentencia T-955 de 2003 resaltó que tienen también deberes hacia el desarrollo sostenible y el uso responsable de sus recursos. Obviamente, se trata de supuestos correlativos, que no pueden ser desconocidos por las demás autoridades públicas, y que deben llevar a espacios de concertación con las entidades territoriales y las corporaciones autónomas, para que los problemas ambientales y especialmente la percepción de los pueblos indígenas (usualmente armónica con la conservación y preservación del ambiente sano) sea tomada en cuenta, con efectos reales, por parte de las autoridades públicas”*

La implementación efectiva de estos instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental es fundamental para organizar las actividades mineras de manera que se respeten los derechos y las prácticas tradicionales de las comunidades afrocolombianas. Al integrar estos instrumentos en la planificación y ejecución de proyectos mineros, se promueve un enfoque que no solo cumple con los requisitos legales, sino que también garantiza una adecuada protección de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades. El artículo 2.2.12.2 del Decreto 1384 de 2023 establece que el Plan de Manejo Ambiental de los territorios colectivos adjudicados, en trámite u ocupados ancestral y/o tradicionalmente, es un instrumento de planificación del uso, manejo y administración ambiental del territorio y de los recursos naturales renovables que adopta el Consejo Comunitario como un mecanismo propio de gobierno y gestión del territorio colectivo. Los Términos de Referencia acogidos mediante la presente reglamentación ubican el Plan de Manejo Ambiental de los territorios de comunidades negras como uno de los principales instrumentos de referencia para el desarrollo de las actividades mineras dentro de la comunidad, con criterios de sostenibilidad y que salvaguarden los intereses colectivos de protección del medio ambiente.

#### **Pequeña minería como ámbito de aplicación de la reglamentación**

Con respecto al ámbito de aplicación de la presente reglamentación la cual está definida para la pequeña minería, es necesario contextualizar los términos utilizados para este tipo de actividad. La Organización para la Cooperación y el

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

Desarrollo Económicos – OCDE define la minería artesanal y en pequeña escala – MAPE, como “operaciones mineras formales o informales con características predominantemente simplificadas de exploración, extracción, procesamiento y transporte. La MAPE es normalmente poco intensiva en capital y utiliza tecnología de alta densidad de mano de obra”.

En Colombia, la normativa sobre las actividades de minería artesanal o de pequeña escala se ha desarrollado desde la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), en los artículos 31, 165, 248 y 249, donde se contempla la creación de áreas de reserva especial a favor de comunidades mineras donde existen explotaciones tradicionales de minería informal.


No obstante, es a partir de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018”, donde se estableció que las actividades mineras se clasificarían en minería de subsistencia, pequeña, mediana y gran minería. El artículo 19 establece los mecanismos para operar bajo el amparo de un título en la pequeña minería, reconociendo que los subcontratos de formalización minera y la devolución de áreas para la formalización minera son mecanismos para trabajar bajo dicho amparo. Lo anterior fue definido con el propósito de establecer estrategias para una regulación diferenciada de los distintos tipos de minería, según la escala de producción, grupos de minerales, métodos de explotación y formalidad. Como resultado de esta reglamentación, se expidió el Decreto 1666 de 2016, relacionado con la clasificación de la minería en Colombia.

Posteriormente, la Ley 1955 de 2019 sancionó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, donde se contemplan condiciones del contrato de concesión diferencial para la pequeña minería. Posteriormente, se reglamentó lo anterior con la expedición del Decreto 1378 de 2020, que establece los requisitos diferenciales para el otorgamiento de contratos de concesión a mineros de pequeña escala y beneficiarios de devolución de áreas. Ahora bien, en el contexto social y económico, se estimó en el Proyecto Legislativo 314 de 2020 (que posteriormente dio lugar a la Ley 2250 de 2022) que aproximadamente 150.000 personas están empleadas en la minería a pequeña escala. El efecto multiplicador de este tipo de minería sobre las economías locales en la generación de riqueza, empleo e ingresos es significativo, lo que evidencia la importancia de la pequeña minería para sostener a individuos, familias e incluso municipios enteros.

En este sentido, el Decreto 1396 de 2023 establece en su Artículo 2.2.5.11.5.8 que *“cuando se trate de actividades de pequeña minería realizadas exclusiva y directamente por comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en sus territorios colectivos, las autoridades ambientales aplicarán criterios diferenciales en materia de licenciamiento ambiental. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentará los términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental y procedimiento diferencial del licenciamiento ambiental para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”*. Con lo cual se establece que la presente reglamentación se regirá para las actividades de pequeña minería que cumplan con los requisitos definidos en el Decreto 1666 de 2016.

Por lo anterior, la presente reglamentación se regirá para las actividades de pequeña minería adelantadas por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que cuenten con el respectivo contrato de concesión minera especial otorgado por la autoridad minera, conforme lo estipulado en el Decreto 1396 de 2023.

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

### **Sustracción en áreas de Reserva Forestal de Ley 2 de 1959.**

A través del artículo 1° de la Ley 2ª de 1959 y el Decreto 111 de 1959, se establecieron con carácter de “Zonas Forestales Protectoras” y “Bosques de Interés General”, las áreas de reserva forestal nacionales del Pacífico, Central, del Río Magdalena, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la Serranía de los Motilones, del Cocuy y de la Amazonía, para el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre.

En relación con las mencionadas reservas forestales, el artículo 22 del Decreto 2372 de 2010, compilado en el artículo 2.2.2.1.3.1. del Decreto Único 1076 de 2015, determinó que no son consideradas áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), sino estrategias de conservación *in situ* que aportan a la protección, planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país, de modo que mantienen plena vigencia y se continúan rigiendo para todos sus efectos por las normas que la regulan.

Las reservas de la Ley 2ª de 1959 se encuentran reguladas por lo dispuesto en los artículos 202 Modificado por el art. 203, Ley 1450 de 2011 y siguientes del Decreto-Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), los cuales exigen la sustracción previa de las áreas cuando al interior de estas se pretendan desarrollar proyectos de utilidad pública, como es el caso de las actividades mineras, en razón al cambio del uso del suelo, acogiendo específicamente las disposiciones del artículo 210 del Código de Recursos Naturales<sup>1</sup>, el cual planteó que,

*“Si en área de reserva forestal, por razones de utilidad pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente sustraída de la reserva (...)”*

Si bien, el Consejo de Estado<sup>2</sup> ha establecido que, incluso el ambiente como interés general posee potencialidad de limitar o sacrificar situaciones particulares como la propiedad privada, no podrá limitar su núcleo fundamental o impedir así sea su ejercicio mínimo y por lo tanto, “no puede ser objeto de restricciones irrazonables o desproporcionadas, que se reduzcan en el desconocimiento del interés legítimo que le asiste al propietario de obtener la utilidad económica (...)”<sup>3</sup>

Es por esto por lo que, el ordenamiento y el desarrollo de la actividad deben buscar la armonización de los dos valores para permitir tanto el ejercicio de la actividad privada, como la protección de los recursos naturales.

Claramente la sustracción de área de reserva forestal es un proceso previo al desarrollo de un proyecto, obra o actividad de manera que se permita a la autoridad ambiental realizar la evaluación sobre la pertinencia o no de levantar la figura jurídica de reserva forestal de Ley 2 de 1959. De otra parte, la sustracción es una decisión de ordenación del área objeto de solicitud cuando por razones de utilidad pública o interés social se requieran realizar actividades económicas que impliquen la remoción de bosques o el cambio en el uso de los suelos.


<sup>1</sup> Gómez-Rey, A., Henao Mera, A., Rincón Escobar, C. La minería en páramos, humedales y reservas forestales. Edit Universidad del Rosario. 2017.

<sup>2</sup> Colombia. Consejo de Estado. Sala Consultiva y Servicio civil. Concepto del Consejo de Estado, radicación 2233 )11 dic de 2014). CP: William Zambrano Cetina

<sup>3</sup> Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C.189 de 2006. MP: Rodrigo Escobar Gil.

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

La sustracción de un área de reserva forestal establecida mediante la Ley 2 de 1959, se entiende como la decisión administrativa a través de la cual la autoridad ambiental competente, con base en información técnica, deja sin efectos jurídicos el establecimiento de una porción de área delimitada como reserva forestal.

Particularmente para el tema minero, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 685 de 2001, las zonas de reserva forestal son consideradas “zonas excluibles de la minería”, en las que no podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras y dispuso que “(...) la autoridad minera previo acto administrativo fundamentado de la autoridad ambiental que decreta la sustracción del área requerida, podrá autorizar que en las zonas mencionadas en el presente artículo, con excepción de los parques, puedan adelantarse actividades mineras en forma restringida o sólo por determinados métodos y sistemas de extracción que no afecten los objetivos de la zona de exclusión. Para tal efecto, el interesado en el Contrato de Concesión deberá presentar los estudios que demuestren la compatibilidad de las actividades mineras con tales objetivos.” (Subrayado fuera del texto).

En relación con la sustracción de las reservas forestales del orden nacional, el numeral 18 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, el 3° párrafo del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011 y el numeral 14 del artículo 2° del Decreto Ley 3570 de 2011, determinaron que se trata de una función a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.


Respecto al ejercicio de esta competencia, debe tenerse en cuenta que el párrafo 3° del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011 prevé que “*Las áreas de reserva forestal establecidas por el artículo 1o de la Ley 2ª de 1959 y las demás áreas de reserva forestal nacionales, únicamente podrán ser objeto de (...) sustracción (...) por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la entidad que haga sus veces con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales y con la colaboración del Ministerio respectivo según el área de interés de que se trate.*”

A partir del análisis de los requisitos diferenciales establecidos por el artículo **2.2.5.11.5.8 del Decreto 1396 de 2023** para establecer la reglamentación de los términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental y procedimiento diferencial del licenciamiento ambiental para el contrato de concesión minera especial para comunidades negras de pequeña minería en territorios colectivos, en trámite de adjudicación y ocupados ancestralmente por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Si bien dicho decreto únicamente hace alusión a estudios ambientales diferenciales para lo correspondiente a la licencia ambiental, debe tenerse en cuenta que el levantamiento de la figura jurídica de protección, es decir la sustracción de reservas forestales, es un requisito previo para que la autoridad ambiental competente pueda autorizar la ejecución de actividades mediante la respectiva licencia ambiental.

En palabras de la Oficina Asesora Jurídica “(...) bajo una interpretación sistemática de las normas, se evidencia la interdependencia entre la sustracción de reserva forestal y la obtención de los permisos, concesiones o licencias ambientales. En efecto, para que cualquiera de estos instrumentos pueda ser otorgado, se requiere la autorización previa de la sustracción, la cual puede tramitarse de manera simultánea con el licenciamiento (...) De una lectura sistemática del Decreto 1076 de 2015 (en particular, el párrafo 5 del artículo 2.2.2.3.6.3) y de las resoluciones sectoriales, se sigue la interdependencia entre sustracción y licenciamiento: la licencia no puede otorgarse sin la sustracción previa y vigente, y los trámites pueden adelantarse de manera simultánea. (...)”<sup>4</sup> (Subrayado fuera del texto).

<sup>4</sup> Concepto 13002025E3014626 del 02 de septiembre de 2025

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07


Por lo anterior, y con el fin de lograr el cumplimiento del objetivo del Decreto 1396 de 2023 esto es el fomento y desarrollo de las actividades mineras por parte de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, es necesario contar con un marco regulatorio que, además de establecer mecanismos diferenciales en materia de licenciamiento ambiental, establezca mecanismos diferenciales en materia de sustracción de áreas de reserva forestal de Ley 2 de 1959, garantizando así la independencia que existe entre estos dos instrumentos ambientales, bajo el entendido de que la sustracción es un requisito del procedimiento ambiental establecido en el parágrafo 5 del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto Único 1076 de 2015.

Considerando que en las áreas de reserva forestal de Ley 2 de 1959 se pueden presentar solicitudes de Contrato de Concesión Minera Especial para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para actividades de pequeña minera que trata el Decreto 1396 de 2023, en los eventos en que exista un concepto técnico de viabilidad del estudio de impacto ambiental por parte de la autoridad ambiental competente para la licencia ambiental, se deberá dar traslado por competencia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin que esta cartera, en el marco de sus competencias, para evaluar la información la información con el fin de expedir el acto administrativo que decide o no la sustracción para el polígono objeto de licenciamiento ambiental. Este procedimiento se surtirá bajo el mismo trámite de solicitud de Licencia Ambiental en el marco del procedimiento diferenciado establecido en cumplimiento del Artículo 2.2.5.11.5.8 del Decreto 1396 de 2023, por lo tanto, el consejo comunitario no requerirá desplegar ninguna actuación adicional a la iniciada bajo el trámite de Licencia Ambiental. La sustracción de áreas de reserva forestal de Ley 2 de 1959 de que trata la presente resolución será definitiva.

La sustracción de áreas de reserva forestal de Ley 2 de 1959 contará con medidas de compensación que resulten necesarias para garantizar la conservación, restauración y sostenibilidad ecológica de dichas reservas y serán independientes de las medidas de compensación ambiental que se establezcan en el marco de la licencia ambiental. Por tanto, la formulación, ejecución y cumplimiento de dichas compensaciones deberán estar debidamente diferenciadas y detalladas, respetando la distribución de competencias entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la autoridad ambiental competente y acorde al inciso 2º del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011<sup>5</sup> que determino que *“En los casos en que proceda la sustracción de las áreas de reserva forestal, sea esta temporal o definitiva, la autoridad ambiental competente impondrá al interesado en la sustracción, las medidas de compensación, restauración y recuperación a que haya lugar, sin perjuicio de las que sean impuestas en virtud del desarrollo de la actividad que se pretenda desarrollar en el área sustraída. Para el caso de sustracción temporal, las compensaciones se establecerán de acuerdo con el área afectada.”* (Subrayado fuera del texto).

Aunado a lo anterior, este Ministerio expidió la Resolución 256 de 2018 *“Por la cual se adopta la actualización del Manual de Compensaciones Ambientales del Componente Biótico y se toman otras determinaciones”*, modificada por la Resolución 1428 de 2018. A través de lo numerales 7, 8 y 9 del mencionado manual se adoptaron las disposiciones correspondientes a la compensación por sustracción de reservas forestales.

<sup>5</sup> Inciso 2º del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011 - *“En los casos en que proceda la sustracción de las áreas de reserva forestal, sea esta temporal o definitiva, la autoridad ambiental competente impondrá al interesado en la sustracción, las medidas de compensación, restauración y recuperación a que haya lugar, sin perjuicio de las que sean impuestas en virtud del desarrollo de la actividad que se pretenda desarrollar en el área sustraída. Para el caso de sustracción temporal, las compensaciones se establecerán de acuerdo con el área afectada.”* (Subrayado fuera del texto).

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	<b>MEMORIA JUSTIFICATIVA</b>	 Sistema Integrado de Gestión
	<b>Proceso:</b> Gestión jurídica	
<b>Versión:</b> 4	<b>Vigencia:</b> 25/11/2022	<b>Código:</b> F-A-GJR-07

Así las cosas, el procedimiento de sustracción contemplado en el Capítulo 3 del instrumento normativo es diferencial con respecto a lo reglamentado hasta el momento en el tema de sustracciones, entendiendo que facilita a las comunidades negras que opten por iniciar un proceso de licenciamiento ambiental, la presentación de la información técnica y su correspondiente evaluación simplificando así el trámite. La sustracción se evaluará y otorgará una vez se haya viabilizado técnicamente el Estudio de Impacto Ambiental – EIA por parte de la autoridad ambiental, teniendo en cuenta que en caso de no viabilizarse técnicamente dicho instrumento perdería toda razón de ser la evaluación de la sustracción.

## **2. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO**


Las disposiciones contenidas en el instrumento normativo objeto de la presente memoria justificativa son aplicables a las autoridades ambientales competentes, a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que cuenten con contrato de concesión minera especial de pequeña minera inscrito en el Registro Minero, en los términos del Decreto 1396 de 2023 y la Ley 70 de 1993.

## **3. VIABILIDAD JURÍDICA**

### **3.1. Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo**

Las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la expedición del presente instrumento normativo emanan de las siguientes disposiciones legales:

- El numeral 2 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, que establece que le corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otras funciones, regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural.
- El numeral 14 del artículo 5 ibidem, que asigna entre otras funciones al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la de “definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas”.
- El Artículo 1 del Decreto – Ley 3570 del 2011 que establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.
- El numeral 18 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y el numeral 14 del artículo 2 del Decreto-Ley 3570 de 2011, en concordancia con el artículo 204 de la Ley 1450 de 2011, que establecen que las autoridades ambientales,

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	<b>MEMORIA JUSTIFICATIVA</b>	 Sistema Integrado de Gestión
	<b>Proceso:</b> Gestión jurídica	
<b>Versión:</b> 4	<b>Vigencia:</b> 25/11/2022	<b>Código:</b> F-A-GJR-07

en el marco de sus competencias, podrán declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reservas forestales nacionales.

- El Decreto 1396 de 2023 reglamenta el Capítulo V de la Ley 70 de 1993 sobre recursos mineros y crea la figura del Contrato de Concesión Minera Espacial para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
- El artículo 2.2.5.11.5.8 del Decreto 1396 de 2023 establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentará los términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental y procedimiento diferencial del licenciamiento ambiental para la actividad de pequeña minera en Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

### 3.2. Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada

Las normas que fundamentan la competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la expedición del presente acto administrativo se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano.

### 3.3. Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas

No aplica.


### 3.4. Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición del proyecto normativo (órganos de cierre de cada jurisdicción)

Sentencia del Consejo de Estado del 14 de octubre del 2021, con radicado número 19001-23-33-000-2021-00086-01 (ACU), que ordena la reglamentación de los artículos 25, 31 y 59 de la Ley 70 de 1993 en desarrollo de una acción de cumplimiento.

En cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado del 14 de octubre de 2021, que resolvió una Acción de Cumplimiento, le ordena al Presidente de la República reglamentar concretamente los artículos 25°, 31° y 59° de la Ley 70 de 1993, en un término máximo de 6 meses.

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante Sentencia Número 162 del 26 de agosto del 2021, resolvió la Acción de Cumplimiento y ordenó al presidente de la República, que en un término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, expedir la correspondiente reglamentación de los artículos 25°, 31°, 52°, 55° y 59° de la Ley 70 de 1993. La Presidencia de la República impugnó esta decisión y el Consejo de Estado mediante Sentencia del 14 de octubre del 2021, confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Cauca y ratificó la orden de expedir en término máximo de seis (6) meses, la correspondiente reglamentación de los artículos 25°, 31° y 59° de la Ley 70 de 1993. A continuación, se menciona lo establecido en los presentes artículos:

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

- *“ARTÍCULO 25. En áreas adjudicadas colectivamente a las comunidades negras, en las cuales en el futuro la autoridad ambiental considere necesaria la protección de especies, ecosistemas o biomas, por su significación ecológica, se constituirán reservas naturales especiales en cuya delimitación, conservación y manejo participarán las comunidades y las autoridades locales. Además, se aplicará lo dispuesto en el artículo 51 de esta ley. El Gobierno reglamentará lo dispuesto en el presente artículo”*
- *“ARTÍCULO 31. Para efecto de lo consagrado en los artículos anteriores, el Gobierno reglamentará los requisitos y demás condiciones necesarias para su efectiva aplicación, de acuerdo con las normas mineras vigentes”*
- *“ARTÍCULO 59. Las cuencas hidrográficas en que se asienten las comunidades negras beneficiarias de la titulación colectiva se constituirán en unidades para efectos de la planificación del uso y aprovechamiento de los recursos naturales conforme a reglamentación que expida el Gobierno Nacional”*


### 3.5. Circunstancias jurídicas adicionales

De la Consulta Previa. – El derecho a la consulta previa se concibió como una garantía para la participación de los pueblos étnicos en todos aquellos asuntos que los afectan, porque están ligados a las determinaciones políticas o económicas sobre su destino y formas vida. El derecho humano a la participación y su modalidad de consulta previa tiene como objetivo proteger a los pueblos étnicos que suelen verse afectados por las actividades de las industrias extractivas en su territorio.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el tratado internacional que incorpora la consulta previa en el país. Fue ratificado por Colombia con la Ley 21 de 1991 —integrándose al bloque de constitucionalidad— y establece las bases necesarias para garantizar la consulta previa de las comunidades étnicas. Ha reforzado la autonomía de las comunidades en sus territorios, pues tienen el derecho a participar en el proceso de toma de decisiones que las puede afectar directamente. Por último, la Directiva 10 del 2013 de la Presidencia de la República de Colombia, aclara el orden del procedimiento y las etapas de la consulta previa, y la Directiva 01 del 2010 especifica las acciones que requieren o no consulta previa.

Así, la consulta previa se desprende de que Colombia se constituye como una república democrática, participativa y pluralista (C.P. art. 1), que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural como un valor constitucional (C.P. arts. 7 y 70) y que las comunidades étnicas gozan de plenos derechos constitucionales fundamentales. Además, la Constitución reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas en sus territorios (CP art. 330), por lo cual Colombia es un Estado multicultural y multiétnico, y la consulta previa es un instrumento y un derecho fundamental para amparar esos principios constitucionales. Por eso la Corte Constitucional ha establecido que “la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que puedan afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales ofrece como particularidad (...) que la referida participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social.” Sentencia SU-039 de 1997 y SU-123 de 2018.



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

Señalar, por último que, en caso de afectaciones ambientales, el derecho a la consulta previa tiene conexiones íntimas con la justicia ambiental, pues ante la perturbación ambiental de los pueblos indígenas y tribales, la Corte Constitucional ha activado la consulta previa para recomponer, a través de la participación, el reparto desigual de las cargas y los beneficios ambientales. Sentencia SU-123 de 2018.

De la Consulta de la presente Iniciativa con la Comisión V del Espacio Nacional de Consulta Previa – Es importante señalar que la iniciativa normativa no requiere agotar un proceso de consulta previa, dado que este se surtió en el marco de la expedición del Decreto 1396 de 2023, no obstante, en cumplimiento del Artículo 2.2.5.11.5.8 del mismo Decreto se concertó la presente iniciativa con la Comisión V del Espacio Nacional de Consulta Previa.

En cumplimiento del Decreto 1396 de 2023 en su Artículo 2.2.5.11.5.8, se desarrolló una ruta de trabajo en conjunto con los delegados de la Comisión V del Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en reunión llevada a cabo en la ciudad de Cali entre el 23 y 25 de abril de 2024. Como resultado de dicha ruta de trabajo se establecieron las siguientes acciones:


- a) El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS presentará a la Comisión V del Espacio Nacional de Consulta Previa, una propuesta de los Términos de Referencia Diferencial, Tramite de Licenciamiento Ambiental Diferencial y Protocolo del que trata el Artículo 2.2.5.11.5.8 del Decreto 1396 de 2023.
- b) Los delegados del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, realizarán 5 visitas técnicas a territorios donde confluyan en mayor medida las comunidades negras y las áreas de explotación minera, con el propósito de realizar un levantamiento de información primaria acerca de los Sistemas Ancestrales de Producción Minera. Estas visitas serán coordinadas con los integrantes de la Comisión V del Espacio Nacional de Consulta Previa.

En cumplimiento de los compromisos con la Comisión V del Espacio Nacional de Consulta Previa se realizaron las visitas de levantamiento de información primaria acerca de los Sistemas Ancestrales de Producción Minera en los siguientes Consejos Comunitarios de COCOMOPOCA, ACADESAN, COCOMACOIRO, Unión Bajo Guelmanbi y El Bien del Futuro, y Consejo Comunitario de La Toma.

Adicionalmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adelantó las respectivas socializaciones del Artículo 2.2.5.11.5.8 del Decreto 1396 de 2023, en el marco del Contrato del Contrato 172 de 2024, con el objeto de: “Prestación de servicios para la estructuración técnica, administrativa y financieramente, así como para el desarrollo los espacios de socialización de la Ruta de implementación del Decreto 1384 de 2023 y del artículo 2.2.5.11.5.8 del Decreto 1396 de 2023, en cumplimiento del Acuerdo NT4-138 – Reglamentación, socialización del Decreto 1384 de 2023 (Capítulo IV, Ley 70/93), Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026”, el cual ha sido ejecutado por la Asociación Proyecto Cultural Afrodescendiente – PCA, quienes fueron delegados por la Comisión V del Espacio Nacional de Consulta Previa. En el marco del dicho contrato, se realizará reunión general con la Comisión V, con el fin de concertar la reglamentación de los criterios diferenciales del licenciamiento ambiental para pequeña minería adelantada por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

De la Consulta Pública a la presente Iniciativa – El proyecto normativo será dispuesto en la Página Web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para consulta pública Nacional por el término de 15 días calendario.

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	<b>MEMORIA JUSTIFICATIVA</b>	 Sistema Integrado de Gestión
	<b>Proceso:</b> Gestión jurídica	
<b>Versión:</b> 4	<b>Vigencia:</b> 25/11/2022	<b>Código:</b> F-A-GJR-07

#### 4. IMPACTO ECONÓMICO

El proyecto normativo propuesto prevé un impacto económico positivo asociado a:

- Regular la actividad minera: La implementación de esta resolución permitirá que las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras cuenten con instrumentos de manejo y control ambiental ajustado a sus condiciones de especial sujeto de protección constitucional y que promueva la mitigación de los impactos ambientales y sociales de las actividades de pequeña minería en sus territorios colectivos.
- Protección de los derechos de las comunidades afrocolombianas raizales y palenqueras: Se garantiza y reconoce el derecho priorizado de las comunidades a explorar y explotar ciertos recursos en sus territorios colectivos, asegurando que esta explotación respete la normatividad ambiental en la protección de los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos, su cultura y visión del territorio.
- Mejoramiento de sus capacidades de desarrollo: La generación de actividades mineras en el marco de los instrumentos de manejo y control ambiental, genera un aumento en las capacidades para el desarrollo social y económico de las comunidades negras al poder acceder a los beneficios del mejoramiento de las tecnologías, eficiencia y seguridad de las operaciones mineras, acceso a los mercados que adquieran minerales bajo estándares de protección social y ambiental promover el crecimiento económico de los consejos comunitarios.


Asimismo, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y las autoridades ambientales urbanas no requieren de cambios mayores en su estructura organizacional para el cumplimiento de las disposiciones del presente proyecto normativo, no obstante, si requieren fortalecer sus capacidades de coordinación con las autoridades de los consejos comunitarios para llevar a cabo un proceso participativo de acceso a la información ambiental, y con ello, permitir a dichas comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras la elaboración del estudio de impacto ambiental para el trámite y obtención de licencia ambiental para las actividades de pequeña minería acorde a la realidad de sus territorios.

#### 5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Si se requiere)

Se considera que el instrumento normativo que se presenta no requiere apropiaciones presupuestales o disposición de nuevos recursos para la aplicación de criterios diferenciales en el proceso de licenciamiento ambiental para las actividades de pequeña minería adelantadas por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en sus territorios, así como tampoco para el control y seguimiento de la misma.

#### 6. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Si se requiere)

El proyecto de resolución propuesto genera un impacto positivo para la gestión medioambiental en los territorios colectivos en la medida en que la aplicación de criterios diferenciales con la participación de los consejos comunitarios contribuye con la celeridad de la solicitud, evaluación y otorgamiento de la licencia ambiental para las actividades de pequeña minería adelantadas exclusivamente por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en sus territorios.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

Este instrumento ambiental permitirá el acceso a instrumentos diferenciales minero-ambientales para las comunidades, afrocolombianas, raizales y palenqueras en sus territorios.

## 7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO

Se adjunta documento técnico de soporte.


### ANEXOS:

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de incorporación en la agenda regulatoria (Firmada por el servidor público competente –entidad originadora)	En trámite
Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de evaluación de conformidad)	No aplica
Informe de observaciones y respuestas (Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y grupos de interés sobre el proyecto normativo)	
Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia de los mercados)	No aplica
Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública (Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite)	No aplica
Otro Documento Preliminar de Soporte Técnico	X

Aprobó:

LAURA CAMILA RAMOS DIAZ  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	<b>MEMORIA JUSTIFICATIVA</b>	 Sistema Integrado de Gestión
	<b>Proceso:</b> Gestión jurídica	
<b>Versión:</b> 4	<b>Vigencia:</b> 25/11/2022	<b>Código:</b> F-A-GJR-07

---

**NATALIA MARÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ**  
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.

---

**YIOVANI PALECHOR MOPAN**  
Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana



Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.